

va declararlo; ordenando además, que se remita al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y á efecto de que diere las providencias que crea oportunas, copia certificada de los fallos de 1ª y de 2ª instancia.

México, Febrero 15 de 1875.—*Lozano.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 18 de 1875.

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones, remítanse al Ministerio de Hacienda las copias á que se refiere el C. Procurador General, y archívese á su vez el To- ca.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Febrero 22 de 1875.
—*Alejo M. Gomez Eguarte.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por el C. Juan N. Flores, contra la ocupacion de una parte de los terrenos de su hacienda de la Zarca, por el C. coronel Manuel Maya, que estableció en ella una tribu de indios kikapoos.

C. Juez del Distrito:

El C. Jefe de Hacienda del Estado, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el C. Felipe Flores se queja de haberse violado en su persona las garantías que le otorgan los art. 16 y 27 de la Constitucion general de la República, con los procedimientos del C. Coronel Manuel Maya, en virtud de los cuales fueron puestos los indios kikapoos en posesion de terrenos situados en

el arroyo de Santo Domingo, pertenecientes á la hacienda de la Zarca, propiedad del quejoso.

El hecho de haber dado posesion á los indios kikapoos en el terreno cerca de Santo Domingo, nadie lo niega. El punto cuestionable consiste en que el Sr. Flores asegura ser de su propiedad el terreno ocupado por los indios, y el Sr. Maya manifiesta que pertenece á la hacienda de la Cadena, propiedad del Sr. D. Liborio Seijas.

Parece inconducente hacer declaraciones en este juicio sobre si el terreno en cuestion pertenece á la hacienda de la Zarca ó á la de la Cadena, supuesto que no es el objeto principal resolver esa cuestion, la cual se ventilaria tal vez en caso necesario ante diversa autoridad con diversos recados y con audiencia del dueño de la Cadena.

Para fundar opinion sobre el objeto que motiva este recurso, hasta esclarecer el punto sobre si el quejoso estaba en posesion del terreno ocupado por el C. Coronel Maya con los indios kikapoos.

Consta en autos comprobado plenamente con un competente número de testigos, que la hacienda de la Zarca, propiedad del quejoso, estaba en posesion del terreno en el cual han sido instalados los indios kikapoos, y que con tal motivo ha resentido gravísimos perjuicios la propia hacienda. De aquí resulta, que aun sin tocar la cuestion por lo relativo al derecho de propiedad, es manifiesta la violacion de la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion general, con el hecho de haber sido molestado el Sr. Flores en sus posesiones sin el previo mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento.

Fundado el Fiscal en los argumentos anteriores y en los arts. 101 y 102 de la Constitucion general de la República, pide al Juzgado se sirva conceder el amparo solicitado por el C. Felipe Flores contra los procedimientos del C. coronel Manuel Maya, en virtud de los cuales fueron instalados los

indios kikapoos en terreno de Santo Domingo, rancho perteneciente á la hacienda de la Zarca, propiedad del quejoso.

Durango, Noviembre 30 de 1874.—*Juan Nájera.*

Es copia que certifico. Durango, Diciembre 9 de 1874.—*Juan Nájera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Diciembre 7 de 1864.

Visto el recurso de amparo promovido por el C. Felipe Flores, contra la ocupacion del rancho de Santo Domingo, que posee y tiene como propio, en la comprension de la hacienda de la Zarca, verificada por el Sub-inspector de las Colonias militares del Estado, para el establecimiento de la tribu de indios kikapoos; con cuyo acto considera el quejoso violadas en su persona las garantías individuales de los arts. 16 y 27 de la Constitucion federal, y fundada su queja en la frac. 1ª del art. 19 de la ley reglamentaria de este juicio. Visto el informe de la autoridad responsable, las pruebas rendidas, el parecer fiscal, y todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando: que en concepto del Sub-inspector de dichas Colonias, el C. Felipe Flores tiene la posesion real en Santo Domingo, y puesta una vinata á la izquierda del ojo de agua de aquel rancho: que esta misma posesion está probada legalmente, y que la autoridad responsable ha confesado el hecho de la ocupacion de Santo Domingo, para el establecimiento de los kikapoos, sin expedir ni mostrar el mandamiento escrito de la autoridad competente, que fundara y motivara la causa legal del procedimiento, que en el caso no podia ser, sino el poder público, autorizado para ocupar la posesion ó la propiedad ajena, con la previa indemnizacion hecha á su dueño: que en consecuencia, la ocupacion verificada por el Sub-inspector de las Colonias Militares, aun en calidad de transitoria, impor-

ta una violacion manifiesta de la garantía consignada en el art. 16 de la Constitucion federal, por la molestia, al ménos, que se infiere al quejoso en sus posesiones, prescindiéndose de que el rancho de Santo Domingo sea ó no sea de su propiedad. Por tales consideraciones, de conformidad con el pedimento fiscal, y con fundamento del art. 16 de la Constitucion federal, y de la ley de 20 de Enero de 869, se declara: que la justicia federal ampara y protege al C. Felipe Flores, contra la ocupacion que el C. Sub-inspector de las Colonias Militares del Estado ha hecho del rancho de Santo Domingo, para establecer en él á la tribu de los indios kikapoos.

Hágase saber, publíquese este fallo en el periódico oficial del mismo Estado, y en el *Semanario Judicial* de la Federacion, expidiéndose al efecto las copias certificadas, y clévase á revision.

Lo decretó y firmo, definitivamente juzgando, el C. Juez interino de Distrito, por ante mí. Doy fé.—*J. Chavarría.*—*Juan B. Arellano.*

Es copia que certifico. Durango, Diciembre 9 de 1874.—*J. B. Arellano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 18 de 1875.

Visto el Juicio de Amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el C. Juan N. Flores, contra la ocupacion de una parte de los terrenos de su hacienda de la Zarca, por el C. coronel Manuel Maya, que estableció en ella una tribu de indios kikapoos, con violacion de los artículos 16 y 27 de la Constitucion Federal; visto el informe del responsable, el parecer fiscal, la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: que consta de autos que el quejoso tenia la posesion de los terrenos ocupados por Maya, que el jefe responsable no ha probado la existencia de una Gr-

den en los términos que exige la Constitución Federal, para proceder á dicha ocupación sin violar el art. 16 de dicha ley; que tampoco consta que hayan precedido á la instalación de la tribu de kikapoos en los terrenos mencionados, las formalidades que proviene el art. 27 del referido Código fundamental.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que amparó al quejoso. Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M^a Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico, México, Marzo 18 de 1875.—*Luis M. Aguilar.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por D. Diego G. Lavin, contra unos acuerdos del Ayuntamiento que vulneran en su persona algunas garantías.

Pedimento del C. promotor fiscal.

Febrero 18 de 1875.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor del mismo, alegando de buc-

na prueba en el juicio de amparo promovido por el C. español Diego G. Lavin, contra los acuerdos del Ayuntamiento de la Capital, por los que se le obliga á pagar por cada corrida de toros, mayor cantidad de la que estipuló desde Agosto de 1865, con el Ayuntamiento de la extinguida Villa del Montecillo, dice: que el peticionario así por los recibos que tiene acompañados, autorizados por D. Alejandro Nieva, agente municipal que fué desde 1868 hasta Abril de 1870, como por la declaración del mismo Sr. Nieva, y la de D. Carlos Guevara y D. Santiago Castillo, presidente propietario el primero, y suplente el segundo del Ayuntamiento de dicha extinguida Villa; en el año de 1865, se comprueba plenamente el contrato que con tal corporación celebró el mencionado Sr. Lavin, para dar funciones de toros, pagando por cada una de ellas, ocho pesos que se le asignaron según lo estipulado; y mediante tal convenio, el Sr. Lavin ha estado justamente en su derecho para oponerse á aquel aumento que malamente ha podido disponer el R. Ayuntamiento de la Capital, sin que antes hubiese sido resindido aquel contrato.

En esta virtud, el peticionario ha justificado, cuanto basta en derecho, la violencia cometida en su persona é intereses y aquella R. Corporación extralimitando sus atribuciones, ha violado, por cierto, las garantías individuales de que hace mérito el Sr. Lavin, principalmente, las otorgadas por los arts. 16 y 17 de la Constitución General, por suspender las corridas de toros que aquella persona ha estado dispuesta á dar, sin mas motivos, que haberlo así acordado la misma corporación, y no la autoridad competente, lo que constituye la infracción de aquellos artículos por las molestias causadas al Sr. Lavin en su persona y derechos adquiridos, y por la fuerza que se le ha hecho al impedírsele dichas funciones de toros, dejando de percibir los productos que han podido proporcionarle aquellos espectáculos; y ese Juzgado, por lo mismo,